





ada día llegan noticias de nuevas amenazas y varias veces a la semana de más homicidios. El liderazgo social sigue poniendo muertos. El asesinato de personas de la Unión Patriótica (UP) en los años ochenta y noventa del siglo anterior, fue posteriormente calificado jurídicamente como Genocidio. No se trata del uso político de la palabra "genocidio", que también podría ser válido; sino de su uso jurídico.

Genocidio no es necesariamente asesinatos, de hecho hay dos casos, en el Derecho Internacional en que **puede que no haya ni un solo muerto, pero hay Genocidio**:

- a.) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
- b.) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Esta práctica en sí, no produce la muerte de miembros del grupo, sino que **afecta la supervivencia del grupo en cuanto grupo, y esto también se considera Genocidio**. En el mismo sentido, un Genocidio no se define por un número determinado de muertos; decir que van pocos o muchos líderes sociales asesinados, no es un argumento.

Según el derecho internacional:

"Se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la **intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo** nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo;
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
- d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
- e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

Las más de 500 amenazas enviadas en el ultimo año contra lideres del movimiento social, tienen graves repercusiones en la integridad



física y psicológica de estos, a tal punto que constituyen tortura.

Colombia ha firmado y ratificado la "Convención para la prevención y sanción del crimen de Genocidio" y por tanto sus definiciones y categorías son obligatorias. Dos cuestiones son relevantes relacionadas con el uso de esta palabra en el marco del conflicto: Primero ¿existe la citada "intención de destruir" al liderazgo social o es un supuesto populista? Segundo, ¿qué significa exactamente "destruir?" ¿se refiere a destrucción física o existe un significado más allá de éste?

El problema es la demostración de "la intención", pero no es suficiente decir que la intención simplemente no existe. De acuerdo con las Naciones Unidas:

"El elemento necesario de intención puede ser deducido de hechos suficientes. En ciertos casos, existirá la evidencia de acciones u omisiones en tal grado que el acusado pueda razonablemente ser asumido como consciente de las consecuencias de su conducta, lo cual lleva al establecimiento de la intención".

Así que el camino es analizar

las consecuencias de la aplicación de determinada política.

Examinemos, primero, la realidad del asesinato de los líderes. Desde enero de 2016, han sido asesinados 186 personas que son parte del liderazgo social. En lo que va del año, hasta julio 5 de 2017, según la Defensoría del Pueblo, ya van asesinados 52 líderes sociales. Además, los datos disponibles, permiten afirmar que por cada líder asesinado hay 10 personas amenazadas de muerte.

En segundo lugar, miremos si tales crímenes son o no sistemáticos, lo que se conecta con un plan. Es decir, un plan presupone una intención. El análisis del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, titulado: "Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales", sostiene que:

"Los 500 eventos de victimización registrados en nuestra base de datos no corresponden a personajes anónimos, o provenientes de mundos ajenos al de todos los colombianos. Son personas con trayectorias análogas a las de miles de nosotros, que construyeron su vocación de liderazgo a brazo partido y a menudo en condiciones tremendamente hostiles".



Luego de un minucioso análisis, los autores concluyen que: "el fenómeno Sí es sistemático. Apabullantemente sistemático. Mirando desde tres perspectivas -semántica, jurídica y estadística- llegamos a la conclusión de que simplemente no es verosímil escamotearle su sistematicidad"/*/.

Es decir, aquí la intención es la de destruir al movimiento social, silenciarlo y que sus miembros abandones sus luchas, se plieguen al sistema y no pretendan modificarlo. Las amenazas y judicializaciones no son indiscriminadas y los asesinatos tampoco. Estas lesiones han sido producidas selectivamente contra integrantes de organizaciones sociales, cívicas, afrodescendientes, campesinas, indígenas, sindicales, ambientalistas, de mujeres y de dere-

chos humanos, entre muchas otras, en el marco de una lucha contrainsurgente previamente concebida.

Tercero, miremos la respuesta del Estado. Esta se puede mostrar en varios niveles:

- a) Negar la existencia del victimario: decir que los paramilitares no existen como tal.
- b) Tratar de negar los asesinatos, reduciéndolos a hechos aislados o a delitos comunes inconexos entre ellos.
- c) Negar los casos en los cuales hay connivencia de agentes del Estado, u
- d) Hacer creer que la omisión no es un delito, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad por los crímenes que no ha cometido de manera directa.

No creemos que el debate sobre el nombre de los perpetradores (que si paramilitares, neo-paramilitares, herederos o Bacrim) sea lo esencial, ni tampoco la respuesta estatal de presentar como una constante los pocos casos, en los cuales la muerte de una persona líder corresponde a un hecho aislado. Eso ofende la inteligencia y la razón. El debate debe hacerse sobre la realidad.

De lo anterior podemos concluir varias cosas:

- a) Al liderazgo social sí lo están matando en Colombia:
- b) Esas muertes sí son sistemáticas, lo que quiere decir que obedece a unas acciones deliberadas que implican un grado de planeación; y
- c) El Estado, ya sea por acción o por omisión, sí tiene una responsabilidad directa en ese plan sistemático de eliminación del liderazgo social que busca su exterminio. La impunidad, la omisión y ciertas medidas militares (apoyando a los perpetradores) indican claramente la "intención de destruir".

La doctrina del "enemigo interno" dicta la eliminación de opositores del régimen, así el gobierno diga que no persigue destruir al liderazgo social, pero las consecuencias de sus actos contribuyen a su destrucción como grupo, como pasó con la UP. Luego, esto es Genocidio. Es imposible, a la luz de los hechos, evadir la conclusión de que el Estado colombiano trata de destruir al liderazgo social en cuanto comunidad, en cuanto colectivo. Por tanto. la categoría Genocidio puede y debe ser aplicada en este caso.

[*] Francisco Gutiérrez, Margarita Marín, Francy Carranza. Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales. Reporte semestral del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria; Programa en Red de la universidades Nacional, Rosario, Norte, Sinú u Sergio Arboleda. Bogotá, Junio de 2017. www.observatoriodetierras.org







ste 20 de julio se conmemoran 207 años del Grito de Independencia, aquel que supuesl tamente convirtió a Co-Iombia en una República, que a su vez generó una nación libre y soberana. Sin embargo, en pleno 2017, Colombia continúa bajo el dominio extranjero, el sometimiento de las mayorías a los designios oligarcas y una carencia profunda de identidad de nación, lo cual es la negación de la verdadera Independencia.

El colonialismo imperial

Como si se tratará de la época colonial cuando los españoles obligaron a los indígenas a entregar el oro, a través del intercambio, la biblia y la fuerza; en la actualidad, empresas

europeas y de los Estados Unidos siquen obligando a los colombianos a entregar su oro, carbón, níquel y el petróleo, y a comprar los derechos de salud, vivienda, servicios públicos, alimentación y educación como si estos fueran simples mercancías.

La venta del territorio nacional al extranjero no paró con la creación del Estado colombiano, sino que se convirtió en política permanente de la oligarquía, que después de 207 años sigue basando su matriz productiva en la extranjerización de la tierra, mientras importa maíz, arroz, café y otros, dejando sin sustento al campesinado colombiano.

Los tratados de libre comercio y las gabelas tributarias a las

empresas transnacionales se convirtieron en las principales técnicas del nuevo colonialismo, cebado en el saqueo de las riquezas naturales y de la hacienda pública. Los casos de corrupción de Electricaribe, Reficar, Odebrecht y Saludcoop, -por solo nombrar algunos-, involucran a socios extranjeros mayoritarios, así como los conflictos entre la minería y las comunidades tienen a la Anglo Gold Ashanti y empresas similares, como las principales responsables.

Así, las empresas multinacionales son las responsables del 80 por ciento de violaciones a los derechos humanos en Colombia, a través de conflictos minero energéticos por la tierra, así como del desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que tratan de evitar la explotación servil de sus territorios. Es política de los empresarios contratar paramilitares como ejércitos de mercenarios que defienden sus intereses de la mano del ejército gringo asentado en nuestro territorio -con más de 10 bases militares-, junto el ejército estatal colombiano.

Por otro lado, la lucha por la validez de las consultas previas evidencia el conflicto entre la extracción y el derecho al territorio, entre la acumulación extranjera y el derecho a la producción agrícola, entre quienes ganan con el saqueo y quienes pierden con la estructura tributaria actual.

La pertenencia del país a organismos como la OEA y la Alianza para el pacífico, la subordinación a la política contrainsurgente y antidrogas estadounidense, y la anexión al Tratado del Atlantico Norte (OTAN), son parte de las razones que demuestran que Colombia no es soberana.

El país político versus el país nacional

4.214.000 de colombianos viven en la miseria y el 70 por ciento trabajan en la informalidad, mientras el 62 por ciento de los trabajadores no pertenecen al sistema de salud. Frente a la supuesta disminución del desempleo en Colombia pregonada por el gobierno, se erige una país real donde a la mayoría de sus habitantes no son sujetos de derechos, porque no les alcanza el ingreso para el diario vivir, u en el reino del mercado no existen para el sistema de salud ni de educación.

Por eso, el pueblo colombiano

no confía en las instituciones y en la clase en el poder, que claramente representa unos intereses contrarios a los de la mayoría del país. La crisis de legitimidad del régimen se evidencia en la abstención electoral, la poca credibilidad en las instituciones, la apatía hacia la política y la ausencia de un proyecto nacional unificado alrededor de los reales intereses de los colombianos; nos encontramos entonces en un país en crisis.

Una nación a pesar de si misma

En la ausencia de un proyecto nacional que logre cambiar el destino de Colombia ha influido de manera decisiva la guerra ideológica, que la clase en el poder ha desatado contra el pueblo colombiano llevándolo a la resignación frente la situación actual del país.

Por su parte, las grandes empresas de la información al fabricar noticias, fabrican intereses y han puesto en la cabeza de los colombianos que salir adelante, es posible sólo a través del éxito individual. Lo que esconde este mensaje es que los ejemplos exitosos existen a partir de la explotación de la mayoría de colombianos

profundizando la desigualdad, mientras quienes buscan el éxito de manera honrada, son limitados por el sistema y condenados al fracaso de nacer y permanecer pobres.

La oligarquía se ha encargado de hacer ver como imposible la satisfacción colectiva las necesidades humanas, mostrando como responsables de la crisis a quienes luchan por un país mas igualitario. La satanización de las organizaciones sociales, la insurgencia y los países con proyectos progresistas, llevan a una sin salida a la mayoría de los colombianos, donde la supervivencia diaria es su única y principal preocupación.

La creación de un proyecto nacional, el de una Colombia libre y soberana, que brinde la posibilidad de que una satisfacción colectiva de vida, de una democratización en todos los ámbitos, una redistribución de la riqueza, la politización social y garantía de derechos es el propósito y el sueño del Ejército de Liberación Nacional para el país.

La vigencia de nuestra lucha radica en la independencia que no ha sido, donde la resistencia es hoy la única garante de nuestra urgente liberación.





n el diseño de los procesos de solución política de conflictos de las últimas 3 décadas, en varias partes del mundo, se ha incorporado la participación de la sociedad, como sujeto relevante en el logro de la paz. La forma más común de la participación ha sido el Diálogo Nacional, en que todos los sectores poblacionales conversan y proponen transformaciones esenciales, con las que se abra la puerta a un futuro de paz. La mayor parte de estos procesos de cambio, quedan truncados, porque las elites dominantes desestiman la voz de la sociedad y solamente la tienen en cuenta, si desde las mayorías nacionales reciben una fuerte presión social, que les obliga a ceder en algo sus privilegios.

La Mesa de Quito de conversaciones entre el gobierno de Santos y el Ejército de Liberación Nacional, adolece del mismo mal que todos los diálogos del mundo; consistente en que mientras las clases dominantes consideran la participación apenas como un "aderezo"; la fuerza insurgente la aprecia como condición indispensable para el éxito de una solución política del conflicto. Contradicción comúnmente conocida, como el debate sobre el carácter vinculante de la participación de la sociedad, en el logro de la paz para Colombia.

Por qué y para qué la participación

Para avanzar en una salida política, en un acuerdo de paz y en una nueva perspectiva de país, no bastan sólo los acuerdos entre el gobierno y las fuerzas insurgentes. En ello, es vital y obligante la participación activa de la sociedad y en especial, de aquellos que nunca han tenido voz y que siempre han estado marginados de las decisiones sobre los rumbos centrales del país. Para que la paz sea real y abra nuevos caminos, son fundamentales las iniciativas y la incidencia efectiva de la sociedad para actuar sobre las causas que han originado y que mantienen el conflicto.

Participar es decidir, es incidir en el curso de los acontecimientos centrales y en los rumbos que tome el país. No es sólo reunirse, hablar, o mandar unos papeles a quienes toman las decisiones. Por esto, la participación de la sociedad y en especial de las mayorías sin voz, de los de abajo, de los excluidos, ha de ser incidente, efectiva y real en las conclusiones y en la construcción de los acuerdos de paz. No ha de ser sólo formal, de meras recomendaciones o

propuestas, de apariencia o intrascendente.

La participación no puede ser algo raquítico, estrecho, de contentillo; un mero convidado de piedra, al igual que lo que ha sido históricamente y, como pretenden quienes siempre han estado en el poder y eternamente han tomado las decisiones. Ello no marcaría nuevos rumbos y seguiríamos con "más de lo mismo".

El rumbo de la sociedad, del Estado y sus gobiernos los deben definir las comunidades organizadas y los ciudadanos como sujetos políticos, como un ejercicio complementario entre la democracia directa y la democracia delegataria.

Las enfermedades de la participación

- El funcionamiento de la política como mafia del poder, al servicio de los grandes capitales.
- ✓ Los movimientos y dinámicas que buscan establecer políticas alternativas, son estigmatizados, satanizados, perseguidos, bloqueados por el terror paramilitar, negados y a la vez crucificados por los medios de comunicación, además de carecer de soporte financiero.

- ✓ Las consultas, referendos, revocatorios, surgidos de la constitución de 1991, son difíciles de convocar y sus efectos están siendo impugnados y pretenden enterrarlos, por parte de las transnacionales, el gran capital y sus esferas de poder.
- El paramilitarismo, las bandas al servicio de gamonales y la persecución institucional, generan un clima de terror e intimidación, que bloquea la participación y la reduce a las formalidades y a ser mera letra muerta.
- ☑ La cultura de indiferencia y apatía ciudadana que promueven la elites dominantes, sus medios de comunicación y sus aparatos ideológicos.

La Agenda de la Mesa de Quito

En el Punto #2 Democracia para la paz, se busca hacer un diagnóstico de las debilidades de la democracia colombiana.

El Punto #3 Transformaciones para la paz, apunta a sintetizar los cambios mínimos e inmediatos, para proyectar y transitar por senderos hacia la paz. En este campo las propuestas transformadoras de la socie-

dad, arrojarán un programa de cambios para la paz.

El Punto #4 sobre Derechos de las Víctimas, se propone ir más allá del reconocimiento a las víctimas y su respeto, para aportar a lograr la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y no olvido.

Ideas rectoras

La participación ha de ser amplia, representativa y no condicionada; ha de tener un componente territorial y otro temático sectorial. Una metodología participativa desde la base, es decir de abajo hacia arriba, en un proceso gradual y ascendente, de síntesis hacia lo nacional y hacia los mínimos básicos que abran la marcha hacia la paz, muchas voces y en especial las que nunca han tenido una in-

cidencia real; participen en la construcción de la materia prima para la agenda común por la paz de Colombia.

La participación, en este caso tendrá que ser creativa e innovadora. No estará restringida o amarrada a los espacios institucionales, que de hecho son limitados y no han resuelto el problema de una democracia, que tenga ciudadanía y participación incidente en los rumbos básicos del país.

La estructura básica que organice la participación tendrá plena independencia y autonomía, por tanto no dependerá, ni estará condicionada por el gobierno. Estará conformada por la misma sociedad; tendrá un manejo autónomo de los fondos financieros y los recursos logísticos que requiera este proceso de participación.





a crisis económica que atraviesa el país definitivamente no se debe a las movilizaciones sociales, paros, consultas populares en contra de la mega minería, o a las justas luchas de las y los trabajadores colombianos por exigir mejores condiciones laborales, como lo afirman burócratas irresponsables. La corrupción y el sistema económico capitalista, que no le interesa invertir en políticas sociales es la verdadera causa.

Anualmente se pierden miles de vidas en Colombia a debido a la corrupción en la que se encuentran las empresas prestadoras de salud (EPS), incapaces de garantizar la atención y la vida a sus afiliados, por su déficit económico debido a la corrupción.

La salud un negocio redondo

La compra de la EPS Cafesalud, que cuenta con más de 6 millones de afiliados, por el consorcio Prestasalud -conformada por 8 empresas del sector-, a un precio de 499,93 millones de dólares, fue el segundo negocio, que más capital ha movido en 2017. Una suma demasiado alta si se tiene en cuenta que Cafesalud es una empresa quebrada, con 2,9 billones de pasivos y perdidas de 13 mil millones de pesos por semana.

La salud y la vida de las y los colombianos se ha convertido en un gran negocio. Las empresas prestadoras de salud, que reciben

dineros públicos y recaudos de sus afiliados, se han convertido en verdaderas ollas de corrupción y clientelismo. Un ejemplo claro de esta situación es la venta no transparente de la más grande EPS del país.

No hay claridad en la venta de Cafesalud, donde sólo hubo 2 oferentes, EPS Sanitas que ofreció 270 mil millones de pesos y el consorcio Prestasalud, que presentó una oferta de 1,4 billones de pesos; una diferencia abismal en términos financieros.

Hay que recordar que en Colombia existe un sistema de seguridad social, financiado por aportes de los afiliados y recursos públicos, manejados por aseguradoras privadas, que reciben un monto anual por

cada afiliado, llamado Unidad de Pago por Capitación (UPC), a cambio de garantizar un plan de beneficios igual para todos los asegurados.

Pero de la UPC también se obtiene la ganancia de los aseguradores, esto quiere decir que las aseguradoras tienen más ganancia, si gastan menos de lo que reciben por cada afiliado. En consecuencia las EPS ofrecen servicios de poca calidad, para obtener mayores ganancias.

Es un negocio redondo, porque las empresas privadas reciben los recursos públicos, y podrán gastarlos como quieran, sin un control real de los gastos. Esto significa que la salud de los colombianos está en manos de empresas privadas, que no les interesa prestar un servicio de

calidad, su interés real es lucrarse con la salud y la vida de sus afiliados. El Estado y la oligarquía colombiana incapaces de proveer salud al pueblo, es la culpable directa de los cientos de miles de muertes, que suceden en el país a causa de un servicio de salud corrupto e ineficiente.

Un país sin salud pública

Lo que ha sucedido con la venta de Cafesalud, es solo una muestra de como este gobierno juega, no solo con los intereses económicos del país, sino con la vida de la mayoría de las y los colombianos. La privatización sistemática de la salud cobra más vidas que el conflicto armado, la delincuencia común, y cualquier otro factor social.

Las empresas privadas que ven en la salud un negocio, no les interesa prestar un servicio de calidad. Por eso no es de extrañar que los médicos en los hospitales, receten Acetaminofén para todos los males y enfermedades de la población.

Vivimos en un país donde juegan con la vida y la salud se ha convertido en una lucha de clases, donde la clase popular se ve sometida al Acetaminofén o a automedicarse, mientras la burguesía colombiana se gasta los recursos públicos, en operaciones estéticas.

Por ello es necesario que el pueblo colombiano junto a los trabajadores de la salud se rebele frente a estas injusticias u luche para exigirle al gobierno el derecho a una salud digna, y el respeto a la vida de los y las colombianas. No puede seguirse permitiendo que las gentes menos favorecidas, tengan que pagar con su vida, la corrupción y la inoperancia de un gobierno incapaz de proveer a su pueblo, algo tan vital como es la salud, mientras premia o no sanciona a los responsables de este grave delito.





n el nororiente colombiano las comunidades resisten la ofensiva de las fuerzas militares y paramilitares del régimen, quienes persiguen copar el territorio, para colocarlo al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros.

Las unidades guerrilleras del Frente de guerra Nororiental, mantienen una respuesta en los Departamentos de Norte de Santander ψ el Cesar, que en los dos últimos meses ha desarrollado, entre otros, estas acciones político militares:

El 31 de mayo a las 1:15 pm, realizamos acciones de francotiradores contra la **Base militar de Boquerón, municipio de El Tarra**, que deja como resultado un soldado muerto, y nuestras fuerzas sin novedad.

El 25 de junio, a las 5:40 pm, incineramos las maquinarias de las empresas petroleras, que reparaban una abolladura a oleoducto Caño Limón Coveñas, en el sitio **filito de Oro, corregimiento de El Aserrío, municipio de Teorama**, Norte de Santander. Luego de lo cual el ejército ametralló el lugar. Nuestras unidades guerrilleras se retiraron sin novedad.

El 28 de junio, a las 4:30 am, emboscamos a una patrulla del ejército gubernamental en la vereda La Llana Baja, corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, Norte de Santander; en donde resultaron 2 soldados muertos, a quienes se recuperó un fusil ACE 2.23 con mira telescópica. Nuestras fuerzas retornaron sin novedad.

El 3 de julio, a las 7:00 pm., con lanzamiento de granadas

se hostiga la sub estación de policía del corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, Cesar. Resultados dos policías heridos. La sub estación quedo parcialmente destruida. Nuestras fuerzas sin novedad.

iColombia para los trabajadores!

iNi un paso atrás, liberación o muerte!

Frente de Guerra Nororiental

Comandante en jefe Manuel Pérez Martínez

Julio 10 de 2017





uando todo indicaba la caída del presidente Temer por sus vínculos, muy claros, con la corrupción, la derecha extrema de Brasil en alianza con los Estados Unidos, decidieron el día 12 de junio, condenar a 9 años de prisión, al dirigente Luis Ignacio Da Silva, por un supuesto delito de corrupción.

A propósito, Rafael Correa en el Congreso del Movimiento Tupamaro de Uruguay, dijo que "como en todos nuestros países, de lo que no se escapa ni siquiera Mujica, al igual que en Brasil y Argentina, de la misma manera que en el Ecuador, la campaña de desprestigio es llevada adelante por un entramado, que reúne a la prensa concentrada y a las viejas élites políticas y económicas. Se trata de un asedio mediático-judicial, que apunta a los líderes del campo popular y progresista, con el fin de inhabilitarlos y acabar con nuestros procesos, hiriendo sus perspectivas electorales".

El presidente Evo Morales condenó este fallo, diciendo que "al hermano Lula Da Silva nuestro apoyo en esta cacería de brujas". Acusación con la que pretenden impedir que este líder popular siga siendo sujeto de un colectivo pueblo en la transformación, de un Brasil de desigualdad e injusto, hacia un Brasil de justicia social, igualdad y soberanía; en momento de inicio de la campaña presidencial 2018.

La persecución contra Lula busca asesinar la esperanza. Al tiempo el Senado impuso una reforma laboral anti social, que entierra derechos de los trabajadores, garantizados en la legislación de Brasil, desde 1943, en la presidencia de Getulio Vargas; decisión criminal en un momento donde la esperanza está siendo un bien bastante escaso en el mundo, en virtud de las políticas del capitalismo que desechan la vida de miles de millones de seres humanos y estimulan el desaliento. El capital conoce que la esperanza es un motor "que tenemos dentro de nosotros que alimenta todas las demás virtudes y nos lanza hacia delante, suscitando nuevos sueños de una sociedad mejor", nos dice Leonardo Boff.

La esperanza popular y nacional

Héctor Díaz Polanco en El Jardín de las identidades, comunidad y poder nos dice que: "si la identidad conlleva el planteamiento de un conflicto socio político, (y por añadidura económico), como el que contiene el proyecto autonómico en su versión latinoamericana, entonces es seguro que será atacada a fondo".

Lo que ha estado en juego desde el golpe de Estado parlamentario a Dilma Rouseff, que se pretende consolidar con la penalización a Lula, es propinarle un golpe político a las propuestas políticas del Partido de los Trabajadores, componente del Frente por un Brasil Popular junto a mas de una decena de movimientos sociales.



Sandino y Carlos Fonseca Dos vidas, una lucha



"El movimiento (revolucionario nicaragüense)
es nacional y antimperialista.
Mantenemos la bandera de libertad
para Nicaragua y para toda Hispanoamérica".
Augusto C. Sandino

s muy importante para este momento histórico que vive Nuestra América retomar las raíces y caminos de la historia antiimperialista que une a nuestros pueblos, muestra de ello fue el gran aporte del comandante en jefe de la Revolución Sandinista Carlos Fonseca Amador, quien por estos días cumplió el 78 aniversario de su natalicio, en la firme defensa histórica del legado de Sandino para fortuna del pueblo nicaragüense y latinoamericano.

Recordar a **Sandino el general de hombres libres** y a Carlos Fonseca el continuador de su pensamiento antiimperialista, propone una nueva interpretación que debemos darle a la primera derrota que sufrió el imperialismo norteamericano en tierras nicaragüenses el primero de enero de 1933, hecho que quedó plasmado en la historia como la primera derrota del imperio yanqui en América.

La vida de Sandino y Carlos, ambos héroes, estuvo desde muy temprano dedicada a esta causa. Carlos al ser sometido a un interrogatorio en abril de 1957, donde se le indagó sobre la escuela donde se formó políticamente; refiriéndose a su paso por Moscú en 1957, respondió:

"La mejor escuela de entrenamiento político podrá ser la de Managua, como Santo Domingo o Madrid, donde se puede sentir con tremendo dolor el contemplar a miles de personas viviendo o mejor muriendo bajo la ignorancia y la miseria. Tal espectáculo despierta en los seres honrados una capacidad combativa, como solamente lo podría hacer la mejor escuela."

Carlos creció en un mundo de contrastes, dominado por la dictadura somocista y al imperialismo norteamericano. El contraste entre la vida de los potentados cafetaleros, los grandes comerciantes y los cortadores de café, contra los campesinos e indios, humillados y maltratados. A sus 18 años de edad, fundó la revista Segovia, se gradúa como bachiller y obtiene la medalla "estrella de oro", para luego fundar y dejar plasmada sus ideas, en el Programa

mínimo del partido Movilización Republicana.

Para el año 1959, el comandante Sandinista es exiliado a Guatemala, de donde marcha a Honduras para unirse a la columna guerrillera Rigoberto López Pérez, la cual fue masacrada en Chaparral Honduras, donde logra sobrevivir con una herida en un pulmón; luego con Germán Gaitán y Julio Pérez fundaron el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN). Su pasión por las letras lo llevo a denunciar los preparativos de invasión a la Bahía de Cochinos en 1962. a través de la publicación llamada el Primer Ideario de Sandino. Posteriormente viaja a honduras donde se reúne con el Coronel Santos López, Tomás Borge, Silvio Mayorga y Noel Guerrero, entre otros, y fundan el frente Sandinista de Liberación Nacional.

Gracias a las luchas del comandante Carlos Fonseca Amador en la Nicaragua de hoy el gobierno sandinista promueve la educación gratuita a todos los niveles y particularmente en las universidades; además cuenta con una batería de programas sociales dirigidos a atender y disminuir erradicar el drama de la pobreza. Nicaragua sandinista se ha mostrado solidaria a los hermanos de los países

del Alba y las causas justas de nuestra América.

La posición geoestratégica que ocupa Nicaragua en el continente y sobre todo en el área centroamericana hace que las fuerzas imperiales la sigan considerando como uno de sus objetivos; en contraste con inversionistas chinos y rusos, quienes adelanta la construcción de un canal interoceánico, que superara en longitud cobertura y proporción al de Panamá, para hacer la unión de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.

De Sandino y Carlos debemos en nuestros tiempos y batallas tomar las banderas contra la intervención imperial yanqui, dejando atrás la complicidad de los gobiernos de turno, que aún siguen atados a los planes de anexión e injerencia gringa. "Sólo conozco la alegría de combatir" sentenció Carlos Fonseca Amador.

La exigencia política e histórica del momento en el continente pasa por retomar las profundas raíces antiimperialistas y anticolonialistas de nuestros pueblos, seamos como Sandino y Carlos leales al pueblo y su Revolución, con el compromiso hasta las últimas consecuencias de quienes fundieron dos vidas en una misma lucha.



